ASPECTOS FISCALES DE LA MOROSIDAD

La morosidad es un problema que afecta a todas las empresas, pero en mayor medida, a las pequeñas y medianas empresas, a los negocios y a los profesionales liberales, hasta el punto de poner en peligro la viabilidad de actividades económicas que, sin dicho lastre, serían productivas y rentables.

La morosidad se ha llegado a calificar de virus, que se encuentra latente en épocas de bonanza económica, pero que se reactiva en periodos de crisis, infectando a toda la economía.

Una buena parte del tejido empresarial español se encuentra afectado por la morosidad, fenómeno que forma parte de nuestras costumbres y que cuenta con una sorprendente tolerancia, a pesar de los enormes perjuicios que los deudores causan a las empresas. No obstante, en la actualidad, dada la compleja situación que atraviesa no solo la economía de nuestro país, sino la mundial, este fenómeno ha aumentado vertiginosamente.

No existe una solución perfecta, ni a nivel legislativo ni a nivel de gestión, para erradicar este problema pero, en adición a las oportunas medidas preventivas que toda empresa debe establecer al contratar con sus clientes, las empresas deben tener en consideración las medidas paliativas que, una vez producido el impago, vienen establecidas en la legislación fiscal, en los ámbitos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A este respecto, conviene hacer un sucinto repaso de las previsiones contenidas en la regulación fiscal de los diferentes impuestos a los que están sometidas las actividades económicas, en relación con los distintos supuestos de morosidad.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, el apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de dicho Impuesto, establece que serán deducibles las pérdidas por deterioro (nuevo concepto introducido por la reciente reforma mercantil en el ámbito contable que viene a sustituir a las provisiones) de los créditos derivados de las posibles insolvencias de los deudores.

Para ello, es necesario que, a la fecha de devengo del impuesto, es decir, a la finalización del periodo impositivo, que generalmente coincide con el 31 de diciembre, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.
- b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
- c) Que el deudor esté procesado por el delito de alzamiento de bienes.
- d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

No obstante, aún concurriendo alguna de las citadas circunstancias, no podría ser objeto de deducción dicho deterioro (salvo en el caso de créditos que sean objeto de un procedimiento judicial o arbitral que verse sobre su existencia o cuantía, en cuyo caso siempre sería deducible), cuando los créditos sean adeudados o afianzados por entidades de derecho público, sean afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, sean garantizados mediante derechos reales, pacto de reserva de dominio y derecho de retención (excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la garantía), sean garantizados mediante contrato de seguro de crédito o caución, hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa, correspondan a personas o entidades vinculadas con el acreedor (salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada) o cuando el citado deterioro esté basado en una estimación global, no individualizada, del riesgo por insolvencias de clientes y deudores.

Las empresas de reducida dimensión (cifra de negocios del año anterior inferior a 8 millones de euros) gozan de un régimen fiscal especial que les concede determinadas ventajas con respecto al resto de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. Una de esas ventajas está relacionada con la insolvencia de sus deudores.

La normativa fiscal permite a las empresas de reducida dimensión deducir una pérdida por deterioro adicional de carácter global, no individualizada, para la cobertura del riesgo de insolvencias, por un importe de hasta el 1 por 100 del saldo de deudores a la conclusión del periodo impositivo.

Dentro del citado saldo de deudores no se computarán aquellos que hayan sido objeto de deterioro individual deducible conforme a lo establecido en el citado artículo 12.2, ni aquellos cuya naturaleza les impida gozar de deducibilidad con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo (garantizados, vinculadas, etc.), por lo que, en la práctica, los únicos créditos que pueden ser objeto de deterioro por las empresas de reducida dimensión y no por el resto de sujetos pasivos, serían aquellos que no siendo objeto de ninguna de las restricciones comentadas, tengan una antigüedad inferior a seis meses desde su vencimiento e, incluso, aquellos que hubiesen sido objeto de renovación o prórroga expresa.

En definitiva, las empresas de reducida dimensión podrán deducir una pérdida por deterioro individualizada de los créditos que cumplan los requisitos del artículo 12.2 y otra global de hasta un 1 por 100 sobre el saldo del resto de los deudores, en las condiciones comentadas en el párrafo anterior.

El límite del 1 por 100 del saldo de los deudores a la conclusión del periodo impositivo es un límite global, de manera que las pérdidas por deterioro por este concepto no son acumulativas, en cada ejercicio solo se podrá registrar sobre el aumento neto de deudores del ejercicio con respecto al anterior.

Por último, respecto a la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos, rige el principio de inscripción contable, de manera que solo será deducible el deterioro cuando, cumpliéndose las exigencias de la normativa fiscal, el mismo esté registrado en la contabilidad de la empresa.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

La morosidad, por desgracia, alcanza también a las actividades económicas desarrolladas por las personas físicas. En este supuesto, la posibilidad de corregir la base imponible del IRPF con motivo de los impagos de los deudores, variará en función de la modalidad de determinación de la base imponible que resulte de aplicación.

Así, los contribuyentes que realicen actividades económicas cuya base imponible se determine por el método de estimación directa normal estarán obligados a llevar contabilidad y, para la determinación de la base imponible deberán remitirse a las normas del Impuesto sobre Sociedades, con alguna particularidad que no afecta al tratamiento de la morosidad, por lo que minorarán su base imponible como consecuencia del deterioro de sus créditos derivada de insolvencias de sus deudores en las mismas condiciones y supuestos que los establecidos en el Impuesto sobre Sociedades.

Sin embargo, las actividades económicas desarrolladas por personas físicas cuya base imponible se determine por el método de estimación directa simplificada (cifra de negocios en el año inmediato anterior inferior a 600.000 euros) presentan una peculiaridad en relación con el tratamiento de los créditos impagados, puesto que la norma prevé que el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificarán aplicando el porcentaje del 5 por 100 sobre el rendimiento neto, excluido este concepto.

Esto significa que, disponga el contribuyente de créditos impagados o no, podrá deducir, para la determinación de su rendimiento neto, el 5 por 100 del mismo, en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación, incluido el deterioro de sus créditos con deudores morosos.

La deducibilidad de ese 5 por 100 no depende de su contabilización puesto que los contribuyentes acogidos a esta modalidad de determinación de la base imponible no están obligados a llevar contabilidad con arreglo al Código de Comercio, sino libros de ingresos, gastos y, en su caso, bienes de inversión.

Por su parte, para el cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas desarrolladas por personas físicas en régimen de estimación objetiva, se toman como referencia determinados signos, índices o módulos determinados anualmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, los cuales no se ven alterados por el hecho de que los contribuyentes dispongan o no de créditos impagados, por lo que esta circunstancia no alterará la cuantía del rendimiento de la actividad ejercida por ellos.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

La normativa del IVA es restrictiva a la hora de autorizar al sujeto pasivo a dejar de ingresar cuotas repercutidas o a solicitar su devolución, cuando el destinatario de las operaciones incumpla su obligación de pago.

En este sentido, únicamente prevé la posibilidad de modificar de la base imponible en dos supuestos de morosidad:

- a) Cuando el destinatario de la operación no haga efectivo el pago de las cuotas repercutidas, siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso.

En este caso, la modificación no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo máximo para el llamamiento de los acreedores para que pongan en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de sus créditos.

- b) Cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, circunstancia que requiere que hayan transcurrido dos años desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo, que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registro exigidos para este impuesto, que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional o, en otro caso, que la base imponible de aquella, IVA excluido, sea superior a 300 euros y que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.

En este supuesto, la modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de dos años citado arriba.

Mediante este mecanismo de modificación de la base imponible, el acreedor reduce la base imponible del IVA repercutido correspondiente a operaciones cuya contraprestación no sea satisfecha por el destinatario y así recupera las cuotas repercutidas no cobradas, bien reduciendo la cuantía del IVA devengado a consignar en la correspondiente declaración liquidación bien solicitando su devolución mediante el oportuno expediente de devolución de ingresos indebidos, lo que, a través del correspondiente procedimiento formal (factura rectificativa y comunicación a Hacienda) también provocará la correspondiente rectificación de las cuotas de IVA deducidas por el destinatario.

En consecuencia, la Hacienda Pública se subroga en la posición del acreedor frente al destinatario de la operación, de ahí que, para garantizar su posición, se establezcan plazos restrictivos para llevar a cabo la mencionada modificación de la base imponible.

Por último, no podrán acogerse a este mecanismo los sujetos pasivos que estén acogidos al régimen especial simplificado, no será de aplicación en el supuesto de créditos que disfruten de garantía real, que estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o caución, que estén adeudados o afianzados por entes públicos o que se trate de créditos entre partes vinculadas ni ampara operaciones en las que el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del IVA, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

En conclusión, cuando una empresa no pueda evitar el incumplimiento de pago por parte de sus deudores y sufra los trastornos que tal circunstancia provoca, debe tener presente los mecanismos previstos en la normativa fiscal para reducir el impacto de la morosidad tanto en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF, como del Impuesto sobre el Valor Añadido, poniendo especial cuidado, en este último caso, en el cómputo de los plazos para efectuar la modificación de la base imponible.

Pablo de Juan Fidalgo
Asociado de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios